

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: MARIA ADELAIDA SALDARRIAGA ESTRADA
DEMANDADO	: COLPENSIONES, PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-005-2021-00045-01
RADICADO INTERNO	: 144-22
DECISIÓN	: ACLARA, ADICIONA Y CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 177

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la nulidad o ineficacia del traslado en pensiones del RPM hacia el RAIS a PROTECCION S.A y como consecuencia se ordene nuevamente su traslado al RPM administrado por Colpensiones con las correspondientes cotizaciones, rendimientos y gastos de administración que efectuó en el RAIS, y se DECLARE que la afiliación al sistema general de seguridad social en pensiones del actor a través del ISS hoy Colpensiones existe y existió sin solución de continuidad.

Como supuestos facticos manifestó que nació el 13 de junio de 1968 y que inició a laborar el 01 de julio de 1990 en la empresa Suramericana de Seguros Generales siendo afiliada al ISS, y siendo empleada de Leonisa el 01 de diciembre de 1994 se afilió a Protección S.A, pero que para su traslado a dicha

entidad no medio ninguna asesoría técnica, profesional, suficiente, clara y completa que le permitiera con la debida información comparar los beneficios, ventajas y desventajas de uno y otro sistema de pensiones, precisando además que ninguna persona perteneciente a Protección S.A especializada en pensiones acudió a atender su proceso de afiliación a dicho fondo privado. Que el 10 de octubre de 2019 recibió de Protección S.A simulación de la cual sería el valor de su pensión a los 57 años y la respuesta a tal simulación fue que la pensión sería de \$6.019.00 mensuales. Agrega que su pensión en el RPM sería de \$8.210.675 por lo que existiría una diferencia de \$2.191.675, por lo que se le está causando un perjuicio aportando en este sentido dictamen pericial por lo que indica que siendo así y demostrado el error al que fue indicado la demandante por ausencia total de la debida información la afiliación al RAIS debe declararse nula. Que el 12 de noviembre de 2020 recibió de Colpensiones comunicación escrita donde le informan que no se acepta el traslado por faltarle menos de 10 años para pensionarse. Que mediante comunicación del 17 de noviembre de 2020 agoto la reclamación administrativa ante Colpensiones la cual tuvo una respuesta negativa el 18 de diciembre de 2020

RESPUESTA COLPENSIONES

Esta entidad dio respuesta manifestando que acepta la fecha nacimiento de la demandante, la afiliación al ISS y el traslado realizado al RAIS, así como las solicitudes presentadas a la entidad y las respuestas emitidas a las mismas, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación de reconocer una pensión de vejez, carga dinámica de la prueba, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración - seguros previsionales - comisiones. valores indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación.

RESPUESTA DE PROTECCION S.A

Al dar respuesta a la demanda manifiesta que acepta la afiliación de la demandante a dicha entidad, no aceptó los demás hechos, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción,

Aprovechamiento Indevido de los Recursos Públicos y del Sistema General de Pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, Inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 01 de junio de 2022, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado de la demandante MARIA ADELAIDA SALDARRIAGA ESTRADA del RPMPD al RAIS, y declaró la afiliación sin solución de continuidad en el RPMPD. ORDENÓ a PROTECCIÓN el traslado a COLPENSIONES, y a esta a recibir los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los rendimientos financieros y los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. CONDENÓ a PROTECCIÓN a trasladar ante COLPENSIONES las cuotas de administración, y las sumas del seguro previsional, descontadas de los aportes realizados en favor del demandante, durante todo el tiempo que este estuvo afiliado en el RAIS. DECLARÒ probada la excepción de ausencia de prueba del vicio en el consentimiento y no probadas las demás. CONDENO en costas a PROTECCIÓN. en favor de la DEMANDANTE, y fijó como agencias en derecho la suma de un salario mínimo.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de Protección S.A interpone recurso de apelación Interpone recurso de apelación en cuanto a la orden de trasladar los dineros que han sido descontados por gastos de administración y primas de seguro previsional indicando qué son dineros que se descontaron por mandato normativo desde la ley 100 de 1993 y que funcionan en ambos regímenes pensionales lo que indica que si la demandante hubiera continuado afiliada al ISS hoy Colpensiones los gastos de administración y los seguros previsionales también se hubieran cobrado en dicho régimen, razón por la cual protección S.A. no actuó de mala fe sino bajo la facultad normativa para realizar dichos descuentos y en ese sentido en cuanto a los gastos de administración la demandada realizó una gestión oportuna y favorable en la cuenta de ahorro individual de la demandante dónde se evidencia según la prueba aportada en

el expediente cuáles fueron los rendimientos que obtuvo y que se da a través también de ese cobro de los gastos de administración por lo que se favoreció la cuenta de ahorro individual. Además de lo anterior precisa que estos gastos de administración no hacen parte de la cuenta de ahorro individual por lo tanto no son dineros que estén disponibles en la cuenta y que se puedan trasladar a Colpensiones.

En cuanto a los seguros previsionales indica que fueron contratados los servicios de un tercero de buena fe qué es la aseguradora para brindarles la cobertura y los siniestros que pudieran incurrir como invalidez o muerte para que la aseguradora entrara a cubrir esas mesadas adicionales.

Qué la demandada no tiene la facultad para cobrar ese dinero girado a la aseguradora porque ya cumplió con ese deber de cobertura desde la suscripción del formulario de afiliación.

Que como el dinero de las sumas por cuotas de administración serían trasladados con cargo a los recursos de la entidad ello sería una condena en perjuicios qué tendría que ser estudiada bajo la responsabilidad civil y en el proceso no fue discutido una eventual condena en perjuicio, sino que el litigio versó sobre la ineficacia de la afiliación.

Que si la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan al Estado anterior, en el estado anterior la cuenta de ahorro individual de la demandante no había producido unos rendimientos pues los mismos ocurrieron única y exclusivamente porque el fondo recibió el formulario de afiliación y la demandante estuvo activa en el régimen de ahorro individual con solidaridad por más de 20 años y por qué de acuerdo a ese cobro de gastos de administración se obtuvieron dichos rendimientos y por lo tanto si la ineficacia es que las cosas vuelvan al Estado anterior ella retornaría el régimen de prima media pero con los rendimientos que hubiese podido obtener allí qué son considerablemente inferiores a los que se generaron en el régimen de ahorro individual. precisando además que durante 20 años nunca se presentó una queja por lo anterior solicita se revoque la sentencia en estos puntos en particular.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentan alegatos.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a trasladar, las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y en consulta a favor de Colpensiones si las mismas deben trasladarse de forma indexada.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante nació el 13 de junio de 1968, (fls 09 de los anexos de la demanda), y se afilió al ISS hoy COLPENSIONES desde el 01 de julio de 1990, según se observa de la historia laboral aportada a folios 19 y ss de los anexos de la demanda y 56 de la contestación de Protección S.A, y se trasladó a LA AFP PROTECCION S.A de forma efectiva a partir del 01 de diciembre de 1994, (fls 80 de la contestación de PROTECCION S.A)

Descendiendo al caso particular, se tiene que, en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, pues esta indicó que se afilió a PROTECCION S.A en el año 1994, cuando estaba trabajando en confecciones Leonisa donde se facilitó cesiones grandes para cubrir toda la población de trabajadores y donde se les informaban de la posibilidad de pasarse para una opción mas segura haciendo referencia a mas segura el hecho de que el ISS se iba a acabar. Que la información que recibió antes del traslado es que la opción de los regímenes privados era más segura para la pensión. Que como la información que les dieron fueron para públicos tan generales y diversos la información que le dieron era así de general y nada específico. Que no recuerda si le hablaron de los aportes voluntarios, ni si le hablaron de la heredabilidad de los aportes.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma

y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**”. (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la

afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCION S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la

posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de vincularse a dicha entidad, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, **son imprescriptibles** y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad accionada, hoy aporte, historial de vinculaciones, certificado de afiliación, relación histórica de movimientos, historia laboral, formulario de afiliación; lo que lleva a concluir que, al momento de trasladarse al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado; y confirmar la orden dada de trasladar a los aportes efectuados por la demandante, incluidos los frutos, rendimientos e intereses.

2. De los efectos de la ineficacia

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes:

1º. Capital ahorrado: Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

2º. Rendimientos: En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

3º. Los gastos de administración, encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”*, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º)

Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, **se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.**” (Resalto fuera del texto)*

Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Conceptos que **no prescriben** teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021.

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el principio de sostenibilidad financiera no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”

En virtud de lo anterior la sentencia de primera instancia debe ser ACLARADA, en el sentido de que la orden dada a PROTECCION S.A, para que traslade a Colpensiones **los gastos de administración** los mismos se encuentran constituidos como anteriormente se explicó por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*” por el tiempo en que la demandante estuvo afiliada a dicho fondo, y se ADICIONARA la sentencia en el sentido de que dichos conceptos deben trasladarse de forma indexada. En todo lo demás se confirma la sentencia recurrida.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCION S.A en la suma de \$1.000.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ACLARAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de que la orden dada a PROTECCION S.A, para que traslade a Colpensiones **los gastos de administración** los mismos se encuentran constituidos por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*” por el tiempo en que la demandante estuvo afiliada en dicho fondo. Así mismo se ADICIONA la sentencia en el sentido de que dichos conceptos deben trasladarse de forma indexada

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PROTECCION S.A en la suma de \$1.000.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARIA ADELAIDA SALDARRIAGA ESTRADA
DEMANDADO	: COLPENSIONES, PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-005-2021-00045-01
RADICADO INTERNO	: 144-22
DECISIÓN	: ACLARA, ADICIONA Y CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 15 de julio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 15 de julio de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO